

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

S.J.C.S.- 154/2026

Se ha recibido en el Servicio Jurídico en la Consejería de Sanidad, para su preceptivo informe, el proyecto de modificación del contrato denominado **“SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS 6 EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD: ADUANA, 29; AGUSTÍN DE FOXÁ, 4; GENERAL ORAÁ, 15; RONDA DE SEGOVIA, 52 (EDIFICIO PONTONES); AVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 2 (LRSP); Y LÓPEZ DE HOYOS, 35”**, adjudicado en su día a la entidad SGS TECNOS, S.A.U.

A la vista de los antecedentes remitidos, y al amparo del artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, tenemos el honor de emitir el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 2 de junio de 2026 se recibió en este Servicio Jurídico una solicitud de informe en relación con el proyecto de modificación del contrato arriba referenciado.

SEGUNDO.- La citada solicitud se acompañaba de la siguiente documentación

- Propuesta de modificación.
- Escrito de conformidad del contratista de 1 de junio de 2026.
- Memoria justificativa.
- Proyecto de orden de aprobación de la modificación del contrato.

TERCERO.- La ampliación del expediente, solicitada al amparo y con los efectos previstos en el artículo 16.4 del Decreto 105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se

aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ha tenido entrada en este Servicio Jurídico el 10 de junio de 2026.

A los anteriores hechos, les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- La legislación aplicable de contratos de las Administraciones Públicas tradicionalmente consagra, entre las prerrogativas de la Administración en la contratación pública, la llamada *potestas variandi* o potestad de modificación del contrato; así se recoge en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP): "*dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta*".

La jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica un apartamiento del principio básico que en materia contractual es el de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987).

Constituye un poder para adaptar los contratos a las necesidades públicas, de manera que es el interés general el que debe prevalecer en todo caso (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978).

El necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus términos y la admisibilidad de que la Administración pueda variar tales condiciones en determinadas circunstancias y por razones de interés público, llevan a admitir el citado *ius variandi* de la

Administración, pero con sometimiento a determinados requisitos, para evitar la indebida alteración del principio de licitación pública.

Por su parte, la Comisión Jurídica Asesora en numerosos dictámenes, entre otros, en su Dictamen 404/24, de 27 de junio, ha recordado que: *“La posibilidad de modificación de los contratos, por parte del órgano de contratación, es una prerrogativa de la Administración que supone una excepción al principio de invariabilidad que preside, como norma general, las relaciones contractuales, y en atención a ello dicha potestad se encuentra reglada en su ejercicio, debiendo someterse de forma estricta a las exigencias del interés público y a los precisos límites que, para la protección de este interés, impone la legislación. En este sentido, ya la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1984, señaló que “...el derecho de modificación con que cuenta la Administración, no es una atribución legal indiscriminada de libre criterio, sino una facultad reglada...”*”.

SEGUNDA.- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 203 de la LCSP, los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204; y
- b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En todo caso, y como presupuesto básico, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público, como bien asevera el artículo 203, en su apartado 1.

Por lo demás, los contratos administrativos sólo pueden ser modificados siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207;

debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y publicándose de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63, todos ellos de la LCSP.

TERCERA.- En el caso que nos ocupa, la modificación sometida a informe consiste, según la memoria, en la incorporación como sede objeto del contrato, de la planta cuarta del edificio situado en la c/ Gran Vía, 30 de Madrid, donde se ubica el personal de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, lo que exige realizar y revisar los planes de autoprotección, así como las actividades que necesariamente se deriven de ello.

Se fundamenta dicha modificación en el artículo 204 de la LCSP, al encontrarse prevista en el apartado 21 de la cláusula 1 del pliego, cuando expresa:

“21.- Modificaciones previstas del contrato:

- Si procede.*
- Podrán efectuarse las modificaciones, una vez formalizado el contrato, cuando concurran alguna de las causas explicitadas en el presente apartado, y siguiendo el procedimiento establecido para ello en el mismo, manteniendo, en todo caso, sus características y condiciones esenciales.*

Tal como se expresa en el art. 204 de la LCSP, se prevé la posibilidad de modificación del contrato hasta una cantidad máxima del 20% del precio inicial del contrato debido a la incorporación o supresión de edificios o locales en los que se deba realizar la implantación, revisión y/o actualización de los Planes de Autoprotección derivada de modificaciones en la estructura o variación en la ubicación de las unidades adscritas que ocupan los centros detallados en el objeto del contrato.”

Así pues, la modificación propuesta, en opinión de este Servicio Jurídico, encaja en los supuestos previstos en el apartado del PCAP transcrito. Asimismo, la propuesta de modificación y el borrador de resolución afirman que el alcance de la misma supone un incremento del coste del contrato de 6.717,62 euros IVA incluido, lo que supone un 12,04% de incremento en el coste del contrato.

También prevé el borrador de resolución el reajuste de la garantía correspondiente al precio del contrato modificado.

CUARTA.- Desde una perspectiva procedimental, consta en el expediente que se ha dado trámite de audiencia al contratista, tal y como exige el artículo 191.1 de la LCSP y el artículo 102 del RGCAP.

QUINTA.- Desde el punto de visto formal, la propuesta de resolución de modificación examinada cumplimenta lo dispuesto en el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al recoger los recursos procedentes contra la misma.

En virtud de lo expuesto puede formularse la siguiente

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente la propuesta de modificación del contrato referenciado.

Es cuanto tiene el honor de informar, no obstante Ud. resolverá.

Madrid, a fecha de firma

**La Letrada del Servicio Jurídico
en la Consejería de Sanidad**

Firmado digitalmente por: LOPEZ RODENAS ROSARIO
Fecha: 2026.06.11 13:44

Fdo.: Rosario López Ródenas

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA